



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 2

**CAUSA N° 1105/2021 "TELECOM ARGENTINA S.A. C/ ENACOM Y OTRO S/
PROCESO DE CONOCIMIENTO"**

Buenos Aires, de de 2025.

Y VISTOS:

Estos actuados caratulados en la forma en que se indica en el epígrafe, en trámite por ante este Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, que se encuentran en condiciones de dictar sentencia, de los que,

RESULTA:

1. A fs. 243/292 se presenta la compañía Telecom Argentina S.A. –por intermedio de su apoderado- ("Telecom") y promueve acción declarativa de certeza en los términos del art. 322 del código procesal civil y comercial de la Nación ("CPCCN") contra el Ente Nacional de Comunicaciones ("ENACOM") y la Municipalidad de La Matanza (en adelante, indistintamente, la "Municipalidad", el "Municipio" o "MLM") con el objeto de que: **(1)** se haga cesar el estado de incertidumbre en que se encuentra Telecom a raíz de la intimación cursada por la Municipalidad por medio de la cual se la intima al pago de una supuesta deuda en concepto de "Tasa por Inspección de Antenas y sus Estructuras Portantes" ("TIAEP") correspondiente a los períodos fiscales enero a diciembre de 2018 y enero a diciembre de 2019 (el "Período Reclamado"), que asciende a [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], por entender que la pretensión fiscal del Municipio resulta inconstitucional y violatoria de normas de orden federal que regulan las telecomunicaciones –ley Argentina Digital 27078, "LAD"; y ley nacional de telecomunicaciones 19798, "LNT"-; **(2)** se declare la inconstitucionalidad de los arts. 272 y 274 y subsiguientes de las ordenanzas fiscales 24915/2017 y



#35304728#453598626#20250429104626357



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 2

25249/2018, y del artículo 43 de las ordenanzas tarifarias 24916/2017 y 25250/2018; normas que regulan la TIAEP correspondientes al Período Reclamado y en las cuales se sustenta el reclamo municipal, por cuanto ellas interfieren, restringen, dificultan, impiden y/u obstaculizan la normal prestación del servicio de telecomunicaciones que brinda Telecom; **(3)** se declare que corresponde exclusivamente al ENACOM la regulación, control y fiscalización de los servicios de telecomunicaciones, resultando contrario a derecho que el Municipio viole y desconozca el régimen federal de telecomunicaciones; **(4)** se declare que la conducta omisiva del ENACOM al abstenerse de impedir, cuestionar o impugnar la pretensión fiscal de la Municipalidad resulta lesiva tanto del apuntado régimen como de los derechos de Telecom; y **(5)** se conceda una medida cautelar de no innovar ordenando a la Municipalidad que se abstenga de reclamar administrativa o judicialmente a Telecom la presunta deuda; todo ello, con costas a las demandadas.

Brinda antecedentes referidos a la actividad de Telecom y al marco regulatorio federal. Sostiene que la regulación de los Servicios TIC es competencia exclusiva del Estado Nacional, y que por lo tanto su actividad se desenvuelve en el marco de la LAD y de la LNT, bajo el control exclusivo del ENACOM.

Detalla aspectos que hacen a la regulación de la TIAEP por parte de la Municipalidad. Transcribe el hecho imponible según las ordenanzas fiscales y los importes exigidos de acuerdo con las ordenanzas tarifarias.

Alega que el Municipio utiliza parámetros a la hora de determinar el valor mensual a abonar en concepto de la tasa por cada estructura portante de antenas que nada tienen que ver con la prestación de servicio alguno ni mucho menos su costo. Explica que se le está imputando a Telecom un costo mensual de \$220.000 por estructura, en razón de no contar con las instalaciones adecuadas al plan de habilitación municipal ni contar con un “convenio de comunicación compartida” celebrado con el Municipio. Entiende que la situación es irrazonable y arbitraria.



#35304728#453598626#20250429104626357



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 2

Menciona que el primer reclamo y determinación por parte de la Municipalidad se realizó el 10 de marzo de 2020; que posteriormente Telecom rechazó dicha intimación y que finalmente el 22 de septiembre de 2020 fue notificada de la resolución 140/2020 (la "resol. 140/2020") por la cual el Municipio rechazó las defensas de la compañía e intimó nuevamente al pago del monto reclamado en concepto de TIAEP. Enfatiza en que Telecom puso en conocimiento del reclamo municipal al ENACOM para que intervenga, y que dicha petición no ha sido atendida.

Funda la competencia del fuero y la legitimación de las partes.

Sostiene que los requisitos de la admisibilidad de la acción declarativa de certeza concurren en esta controversia.

Argumenta en torno al fondo de su pretensión. Postula que el Municipio asumió de manera indebida las competencias exclusivas de la autoridad de contralor federal. Alega que la pretensión fiscal obstaculiza la prestación del servicio de telecomunicaciones a cargo de Telecom, en los términos de la LNT y la LAD; y que la aplicación de la TIAEP conspira contra las finalidades perseguidas por la normativa federal en la medida que crea mecanismos distorsivos y/o discriminatorios entre los distintos prestadores de Servicios TIC. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación con regulaciones municipales excesivas que generan interferencias en los servicios de telecomunicaciones.

Plantea que el valor mensual reclamado en concepto de TIAEP viola los principios de igualdad y razonabilidad receptados en la Constitución Nacional ("CN"). Agrega que el objetivo de la TIAEP es exigir sumas multimillonarias con un mero fin recaudatorio, y que la discriminación que realiza la Municipalidad al reclamar montos distintos en función de si las compañías celebraron convenios de comunicación con aquella devela la irrazonabilidad de la tasa, en tanto si la TIAEP retribuye supuestamente idénticos





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 2

eventuales servicios, los “convenios de comunicación” son extraños al hecho imponible.

Afirma que la Municipalidad no ha prestado a Telecom los servicios de inspección que se retribuyen con la TIAEP, por lo cual están ausentes los requisitos de procedencia de toda tasa municipal. Adiciona a ello que los montos que se exigen resultan desmedidos por no guardar proporcionalidad con el costo del servicio supuestamente prestado por la comuna. Presenta un informe técnico privado con relación a los costos de la tarea de inspección mecánica de distintas estructuras soportes de antenas, certificado por el consejo profesional de ingeniería de telecomunicaciones (“COPITEC”).

Desarrolla en torno a la conducta omisiva del ENACOM frente a las violaciones incurridas por la Municipalidad. Entiende que la omisión del organismo de control federal es inconstitucional.

Funda la medida cautelar peticionada. Ofrece prueba documental, informativa y pericial técnica en telecomunicaciones. Formula reserva del caso federal que entiende involucrado.

2. Con la opinión previa del Ministerio Público Fiscal (fs. 294/297), el juzgado declara su competencia para conocer en autos y requiere a la autoridad demandada la presentación del informe establecido en el art. 4 de la ley 26854 (fs. 298).

A fs. 344 el Tribunal admite la pretensión cautelar; pronunciamiento que es confirmado por la Sala IV de la Excma. Cámara del fuero (fs. 1737 del incidente 2).

A fs. 347 se ordena el traslado de la demanda por el término de treinta (30) días al ENACOM, y por sesenta (60) días a la Municipalidad de La Matanza.

3. A fs. 2034/2047 se presenta el ENACOM –por intermedio de sus apoderadas- y contesta demanda.

Sintetiza la pretensión de Telecom y opone la excepción de falta de legitimación pasiva. Sostiene que el ENACOM es ajeno a la pretensión





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 2

sustancial de la parte actora, y que el organismo no cuenta con competencias ni facultades legales que le permitan tener injerencia alguna sobre las reglamentaciones locales; y menos aún para endilgarle responsabilidad derivada de una supuesta conducta omisiva.

Contesta de manera subsidiaria el fondo del planteo articulado por Telecom, y efectúa negativas generales y particulares.

Aduce que la vía intentada por Telecom es improcedente.

Reseña antecedentes normativos vinculados con las competencias y funciones del ENACOM. Afirma que las leyes federales reconocen facultades exclusivas para regular los lineamientos técnicos relativos a la infraestructura y los equipos que se conecten a las redes de telecomunicaciones, pero que su función se limita a los aspectos técnicos de la prestación de los servicios. Agrega que la aprobación de las estructuras de soporte de antenas que los prestadores instalan recae sobre los municipios, por ser éstos los titulares de facultades en materia urbanística, social, zonal en el territorio e impositivas que graven a esas instalaciones.

Cita precedentes de la CSJN en el marco de los cuales se resolvió en torno a la viabilidad constitucional de las tasas por inspección.

Entiende que no es resorte del organismo expedirse sobre la eventual "confiscatoriedad" o "real interferencia" de las tasas cuestionadas, sin perjuicio de la eventual ilegitimidad de éstas. Manifiesta que la aplicación de las tasas no puede desconocer las relaciones de coordinación, cooperación y colaboración con la Nación y el principio de prevalencia federal, debiendo encontrarse la legislación local en sintonía con la federal.

Concluye que la prestación del servicio es competencia del Estado Nacional, mas toda cuestión de índole típicamente vecinal no resultaría competencia del ENACOM, recayendo esta última en los municipios.

Funda su posición en el sentido de que no existe lesividad en el actuar del ente. Reafirma que no existe competencia legalmente establecida que le permita intervenir.



#35304728#453598626#20250429104626357



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 2

Ofrece prueba documental y plantea la reserva del caso federal.

4. A fs. 2052/2072 se presenta la Municipalidad de La Matanza –a través de su apoderado- y contesta demanda.

Aduce que la demanda es inadmisibile desde el punto de vista formal, en tanto se encuadró en el art. 322 del CPCCN.

Contesta la demanda en subsidio. Resume su objeto y efectúa negativas generales y particulares.

Defiende la potestad tributaria municipal desarrollando *in extenso* con doctrina y jurisprudencia que hacen a su posición.

Refiere a la normativa legal involucrada, y transcribe los artículos específicos de las ordenanzas fiscales y tarifarias que hacen a la TIAEP.

Afirma que no existe interferencia en el ejercicio de la potestad municipal respecto de las regulaciones nacionales en materia de telecomunicaciones, y expone los lineamientos que a ese respecto ha fijado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Alega que no existe interferencia material en el desarrollo de los servicios TIC de la actora, y que la interferencia económica no ha sido acreditada.

Sostiene que las estructuras soporte de antenas son en sí mismas obras civiles, por lo que el ENACOM no es el órgano competente para ejercer jurisdicción sobre ellas.

Argumenta que es improcedente pretender hacer extensivos los beneficios fiscales que emergerían de la LNT; y que se requeriría un acto expreso de la Municipalidad que declare la misma exención tributaria.

Entiende que el quantum fijado por la normativa con relación a la TIAEP es razonable; y que resulta insuficiente atender solo al costo directo e indirecto del servicio involucrado en la tasa, en tanto también hay que ponderar el principio de capacidad contributiva.

Ofrece prueba informativa; y plantea la reserva del caso federal que entiende involucrado en la controversia.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 2

5. A fs. 2092 se resuelve diferir la resolución de la excepción de falta de legitimación pasiva para la oportunidad del dictado de esta sentencia.

A fs. 2103 se ordena la apertura de la causa a prueba por el plazo de cuarenta (40) días, la cual es proveída a fs. 2456/2459 y fs. 2462/2465.

A fs. 2570 se produce la clausura del período probatorio y pasan los autos para alegar, derecho que es ejercido por todas las partes (v. fs. 2572, fs. 2574 y fs. 2576).

Por último, firme la providencia del 15 de abril de 2025 queda la causa en condiciones de dictar sentencia; y

CONSIDERANDO:

I. Que en la tarea de esclarecer la inteligencia de normas de carácter federal, este Tribunal no se encuentra limitado por las argumentaciones de las partes, sino que le incumbe realizar una declaración sobre el punto en disputa según la interpretación que rectamente deba serle otorgada (arg. Fallos: 330:2361).

Desde esta exégesis, lo que la parte actora pretende es, en definitiva, que el suscripto se expida en torno a la procedencia de la pretensión tributaria municipal exteriorizada por conducto de la resol. 140/2020, y en virtud de la cual la Municipalidad procura cobrar a Telecom la TIAEP [REDACTED] por las tareas de inspección supuestamente realizadas sobre las antenas y estructuras portantes de la compañía actora durante el Período Reclamado (ejercicios fiscales 2018 y 2019); declarando la inaplicabilidad de dicha tasa por las diversas razones que aduce y atribuyendo -a su vez- una conducta omisiva del ENACOM, lo que también solicita así se declare.

II. Que, en tanto han mediado objeciones con relación a la procedencia de la vía intentada por la actora (v. fs. 2034/2047 y fs. 2052/2072), corresponde comenzar recordando que frente a circunstancias análogas a las de marras en las que se ha puesto en entredicho la validez de





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 2

tributos locales de distinta índole –incluso con reclamos fiscales en curso–, la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene invariablemente sosteniendo que la acción declarativa resulta formalmente procedente, en tanto no tenga carácter simplemente consultivo, no importe una indagación meramente especulativa y responda a un “caso” que busque precaver los efectos de un acto en ciernes al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal (cfr. “Transportadora de Gas del Sur Sociedad Anónima (TGS) c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, T.352.XXXV, sentencia del 15 de abril de 2004; “Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, CSJ 1023/2012, sentencia del 11 de noviembre de 2014; “Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, CSJ 502/2012, sentencia del 31 de octubre de 2017; “Telefónica Móviles Argentina S.A. c/ Tucumán, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, CSJ 277/2012, sentencia del 4 de junio de 2019; “Bank Boston National Association c/ GCBA – AGIP DGR – resol. 3065/08 (dto. 905/02) s/ proceso de conocimiento”, CAF 12542/2009, sentencia del 12 de noviembre de 2020; entre muchos otros).

En el mismo sentido, se han pronunciado diversas Salas de la Excma. Cámara del fuero (Sala I, “Banco República Oriental del Uruguay c/ GCBA – AGIP – RSL 391/09 – DGR – RSL 1047 y 611/09 (EX 28551/09) s/ proceso de conocimiento”, expte. 31.921/2009, interlocutoria del 3 de junio de 2014; Sala III, “BBVA Banco Francés SA y otros c/ GCBA –AGIP- DGR Resol 3631/08 (dto. 905/02) s/ proceso de conocimiento”, expte. 12.382/2009, sentencia del 29 de junio de 2018; Sala IV, “Banco Macro SA c/ GCBA – AGIP - exp. 307/07 DGR- dto. 651/07 CABA – período 2002 y otro s/ proceso de conocimiento”, expte. 22.920/2009, sentencia del 20 de septiembre de 2018).

También este Tribunal ha admitido procesos declarativos para dirimir esta específica clase de controversias (v. “Boston National Association c/ GCBA – AGIP DGR – resol. 3065/08 (dto. 905/02) s/ proceso de conocimiento”, expte. 12.542/2009, sentencia del 23 de noviembre de 2016, confirmada por Sala II, 12 de septiembre de 2017; “Los Cipreses S.A. c/ GCBA –





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 2

DGR – Resol 2470 y 3253/08 s/ proceso de conocimiento”, expte. 6218/2009, sentencia del 8 de agosto de 2017, confirmada por Sala III, sentencia del 16 de agosto de 2018; “AMX ARGENTINA SA C/ EN – ENACOM y otro s/ proceso de conocimiento”, expte. 25071/2017, sentencia firme del 13 de mayo de 2022; y el suscripto en JNCAF10, “Cervecería y Maltería Quilmes SAICE y G c/ GCBA-AGIP-DGR s/ proceso de conocimiento”, expte. 11.999/2018, sentencia del 27 de febrero de 2020, confirmada por Sala IV, 19 de noviembre de 2020).

Pues bien, bajo los lineamientos jurisprudenciales precedentes, se advierte que ha mediado una actividad explícita de la MLM tendiente a la percepción de la TIAEP cuestionada (v. primera determinación e intimación cursada, anexo V de la demanda, fs. 2/40; y resol. 140/2020, anexo VIII, fs. 2/40; actos que a la postre la autoridad municipal demandada reivindicó durante el proceso). Desde esta perspectiva, es dable concluir que la causa corresponde a una controversia actual y concreta, suscitada por el proceder de la Municipalidad, que Telecom pretende resistir por diversos fundamentos mayormente de índole federal.

En tales condiciones, cabe tener por reunidos los recaudos que exige el art. 322 del CPCCN.

III. Que, en cambio, las quejas en torno a la idoneidad de la vía sí deben resultar de acogida en lo que respecta al ENACOM.

En efecto, la pretensión actoral en lo que a esa autoridad concierne se halla materialmente circunscripta a que se declare que “(...) la conducta omisiva del ENACOM (...) al abstenerse de impedir, cuestionar o impugnar la pretensión fiscal del Municipio (...) resulta lesiva del régimen federal” (v. fs. 243/292, ap. II.4).

Sin embargo, la actora no enuncia con qué propósito aspira a obtener una sentencia en tales términos, ni mucho menos –lo que es más importante– qué lesión actual por falta de certeza en el marco de su relación jurídica con el ENACOM estaría llamada a remediar, la que –vale aclararlo– no se confunde con la que mantiene con la MLM.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 2

Desde esta perspectiva, la declaración pretendida no se vislumbra asociada a un caso contradictorio (en el sentido habilitante de la jurisdicción de los tribunales, según lo ya expresado), resultando, por tanto, inoficiosa. En efecto, no podría predicarse que una sentencia con las características reclamadas ponga fin a una controversia actual, ni se diferenciaría de una consulta en la cual se responde acerca de la eventual solución de predominante interés académico o teórico en el estudio del marco regulatorio de las telecomunicaciones (arg. *contrario sensu* dictamen de la Procuración General en Fallos: 310:606; también Sala II, “Edesur S.A. c/ G.C.B.A. – D.G. Rentas s/ proceso de conocimiento”, expte. 39.181/2010, sentencia del 26 de mayo de 2015; este Tribunal in re “AMX ARGENTINA SA C/ EN – ENACOM Y OTRO S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”, expte. 25071/2017, sentencia firme del 13 de mayo de 2022).

Por último, tampoco existe un acto concreto de parte del ENACOM que se haya puesto en entredicho (arg. Sala I, “AMX Argentina SA c/ EN – ENACOM y otro s/ proceso de conocimiento”, expte. 5342/2014, sentencia del 5 de marzo de 2020).

En tales condiciones, corresponde concluir que la acción intentada contra el ENACOM no supera los estándares reseñados en el considerando anterior de esta sentencia, en cuanto a que los procesos declarativos no pueden presentar un carácter simplemente consultivo ni importar una indagación meramente especulativa.

En consecuencia, corresponde rechazar la demanda a su respecto, resultando por tanto inoficioso expedirse con relación a la excepción de falta de legitimación pasiva.

IV. Que, zanjado lo anterior, corresponde adentrarse al fondo del asunto; no sin antes recordar que para arribar a una justa resolución de la contienda no me encuentro obligado a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que se hayan puesto en consideración, sino tan solo en aquellas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar



#35304726#453598626#20250429104626357



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 2

sustento a un pronunciamiento válido (Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970).

Sobre estas bases, y para un mejor orden expositivo, encuentro atinado adelantar que el planteo medular de Telecom –en lo referido a la inaplicabilidad de la TIAEP a su respecto y durante el Período Reclamado– debe progresar. Ello así, por un diverso orden de razones que a continuación se expondrá.

IV.1. En primer lugar, y esto resulta coherente con el *nomen iuris* utilizado por la autoridad comunal, cabe comenzar destacando que no se encuentra controvertido en autos que la TIAEP ha sido concebida como una auténtica “tasa”.

La Corte ha calificado a la tasa como una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, con estructura jurídica análoga a la del impuesto, y del cual se diferencia por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, cual es el desarrollo de una actividad estatal que atañe al contribuyente (Fallos: 332:1503; entre muchos otros; en el mismo sentido, Sala V, “Telefónica Móviles Argentina S.A. c/ EN – ENACOM y otro s/ proceso de conocimiento”, expte. 38697/2017, del 6 de marzo de 2018; y este Tribunal *in re* “Pampa Energía S.A. c/ Secretaría de Recursos Naturales y D S Resol 1015/98 s/ proceso de conocimiento”, expte. 18275/1999, sentencia del 30 de diciembre de 2020, confirmada por Sala I el 2 de febrero de 2023; véase además el enjundioso estudio sobre la evolución de la jurisprudencia efectuado por CASÁS, José O.; *Derechos y garantías constitucionales del contribuyente. A partir del principio de reserva de ley tributaria*, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005, pág. 517 y ss.).

Bajo esos lineamientos, de las consideraciones volcadas en los precedentes de Fallos 338:313, 344:2728 y 344:2830 (entre otros) se patentiza una consolidada doctrina del máximo tribunal en el sentido de que al cobro de una tasa debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente (criterio ratificado muy recientemente por la





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 2

CSJN in re “Aeropuertos Argentina 2000 S.A. c/ Comuna de Delfín Gallo y otro s/ contencioso administrativo – varios”, sentencia del 15 de abril de 2025, con remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal del 31 de mayo de 2021).

Así entonces, la esencia de las tasas como categoría tributaria es el haber sido concebidas para retribuir servicios que prestaría el municipio –en este caso, la MLM- (cfr. doctrina de Fallos 332:1503).

La Sala IV de la Excma. Cámara del fuero, con atino, ha esquematizado la línea jurisprudencial de la Corte fijada en Fallos: 344:2728 y ha concluido que para que una tasa municipal sea legítima a la luz de la CN: (i) aquella debe encuadrar en la noción de “tasa”, y no ser caracterizada como un mero tributo; (ii) la redacción de la norma que la instituye debe identificar servicios en particular, no pudiendo sus términos ser excesivamente amplios y abarcativos; (iii) Los servicios identificados deben ser efectivamente prestados por el Estado como correlato del cobro de la tasa; siendo el fisco municipal quien debe probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal; y (iv) debe existir una adecuada y precisa cuantificación del tributo (base imponible, alícuota, exenciones y deducciones), debiendo para ello ponderarse prudencialmente el costo global del servicio o actividad concernido (requisito, este último, que surge de Fallos: 234:663) –v. Sala IV de la Excma. Cámara del fuero in re “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA c/ EN-ENACOM y otro s/ proceso de conocimiento”, expte. 18489/2019, sentencia del 11 de junio de 2024; énfasis añadido).

Bajo los lineamientos anteriores, corresponde advertir que no se encuentra acreditada en estos autos la efectiva prestación del servicio que conforma el hecho imponible considerado por la TIAEP (v. ordenanzas fiscales 24915/2017 y 25249/2018) por parte de la MLM.

Sobre el particular, la actora diligenció oficios a la autoridad municipal demandada –en reiteradas oportunidades- a los fines de que acompañe constancia documentada de los servicios previstos en los artículos 272 y 274 de las ordenanzas fiscales, prestados en forma concreta,





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 2

individualizada y efectiva a favor de Telecom, con el detalle circunstanciado de su cumplimiento; y la copia de las actas municipales en donde se acredite que durante el Período Reclamado la Municipalidad prestó a Telecom el servicio retribuido por la TIAEP (v. oficios diligenciados el 23 de febrero de 2023 y el 18 de abril de 2023).

Pues bien, lo cierto es que la MLM contestó dichos oficios acompañando el expediente administrativo iniciado a raíz del requerimiento. De sus constancias, sin embargo, se evidencia que el Municipio elude abiertamente responder la sustancia de lo requerido y –en definitiva- no aporta constancias concretas –siquiera manifestaciones- acerca de la efectiva y concreta prestación del servicio retribuido por la TIAEP (v. presentación municipal glosada a fs. 2525).

Debe recordarse, en este punto, que era la comuna demandada quien se encontraba indudablemente en mejores condiciones para probar –si así hubiera ocurrido- la efectiva prestación de los servicios retribuidos por la TIAEP (cfr. Fallos: 319:2211; y más recientemente in re “Aeropuertos Argentina 2000 S.A.” antes citado, sentencia del 15 de abril de 2025); por lo que debe cargar con las consecuencias negativas en caso de no hacerlo (*mutatis mutandi*, arg. CSJN, “Aceitera General Deheza S.A. c/ EN – M Economía – UCESCI s/ amparo por mora”, expte. 65351/2014/1/RH1, sentencia del 12 de noviembre de 2019; en el mismo sentido, este Juzgado in re “Tunex S.A. c/ EN M Economía – Resol. 166/11 235/11 y 334/11 (conjunta) y otros s/ proceso de conocimiento”, expte. 46531/2011, sentencia del 22 de diciembre de 2020; y “Soto, Yésica Vanesa c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional – dirección General de Fabricaciones Militares s/ daños y perjuicios”, expte. 8451/2017, sentencia del 8 de marzo de 2021).

En conclusión, la falta de organización y puesta a disposición del servicio respectivo al contribuyente conlleva un cobro sin causa, importando ello un agravio al derecho de propiedad (cfr. Fallos: 312:1575; 344:2123, voto de los ministros Maqueda y Rosatti). Por lo visto hasta aquí, la sola falta de



#35304728#453598626#20250429104626357



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 2

acreditación en torno a la efectiva prestación del servicio a cargo de la MLM y la actitud negligente de la autoridad municipal en este punto resultan suficientes para invalidar la tasa cuestionada con relación a Telecom.

IV.2. En otro orden de ideas, otro de los argumentos desarrollados por la accionante en procura de obtener la invalidez e inaplicabilidad de la TIAEP hace a la falta de razonabilidad del *quantum* reclamado por conducto de la resol. 140/2020, contrastando dicho monto con los costos efectivos que insumiría la prestación del servicio de inspección técnica de las estructuras portantes de antenas a cargo de la Municipalidad (v. fs. 243/292, ap. VI.3).

Vale recordar en este punto, que la MLM reclama a Telecom por conducto de la resol. 140/2020 [REDACTED] monto comprensivo de la inspección técnica de [REDACTED] estructuras portantes de antenas de titularidad de la actora, a un costo unitario de \$220.000,00 por estructura para el período fiscal 2018, y de \$286.000,00 por el período fiscal 2019 (v. anexo V de la demanda, fs. 2/40).

Con relación a esto, la compañía actora presentó las conclusiones de un informe técnico privado (v. dictamen profesional glosado como anexo XI a la demanda, fs. 2/40) y, fundamentalmente, produjo durante la etapa probatoria una pericia técnica en telecomunicaciones (v. informes de fs. 2470/2472 y fs. 2509/2511).

De la prueba técnica ofrecida y producida se desprende que:

(1) los períodos de inspección de las estructuras para la evaluación del estado de mantenimiento y condición son: (a) de intervalos de 3 años en el caso de mástiles atirantados y a intervalos de 5 años en el caso de estructuras auto-soportadas (postes y mono-postes), y (b) de 2 años en el caso de mástiles, torres, pedestales y estructuras similares, con miembros tubulares instalados en zonas urbanas costeras o en ambientes agresivos equivalentes en zonas urbanas -v. respuesta al punto de pericia 2, informe de fs. 2470/2472-; y (2) los costos para la realización de la tarea de inspección por parte de un profesional de la





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 2

matrícula, considerando la hora profesional mínima sugerida establecida por el COPITEC durante el Período Reclamado –y por estructura-, ascienden a \$39.600,00 para el período enero-octubre de 2018; \$51.600,00 para el período noviembre-diciembre de 2018; y \$54.000,00 para el período enero-diciembre de 2019 (v. informe de fs. 2509/2511).

Sobre el particular, debe destacarse que la MLM no impugnó en modo alguno las conclusiones de la pericia con observaciones o contraargumentos de índole técnica o económica, más bien solo se limitó a realizar breves presentaciones tendientes a cuestionar la objetividad del profesional desinsaculado (v. fs. 2507 y fs. 2513), sin que éstas logren en modo alguno conmover las conclusiones de fondo realizadas por el perito en el marco de su *expertise*. Asimismo, también se diligenciaron oficios a la autoridad comunal demandada a los efectos de que pueda justificar razonablemente los costos de estos servicios (v. oficios diligenciados el 23 de febrero de 2023 y el 18 de abril de 2023); oportunidad que la MLM desaprovechó sin aportar elemento alguno con relación a esta cuestión (v. respuesta de fs. 2525).

Así entonces, y atendiendo a que -como ya se dijo- es criterio de la Corte que debe existir una adecuada y precisa cuantificación del tributo, debiendo para ello “ponderarse prudencialmente el costo global del servicio o actividad concernido” (cfr. Fallos: 234:663), encuentro que la prueba producida por la actora ha evidenciado con un alto grado de verosimilitud que el *quantum* reclamado en concepto de TIAEP no se condice con una evaluación prudencial del costo del servicio hipotéticamente concernido.

A todo evento, el hecho de que las ordenanzas tarifarias aplicables ajusten el *quantum* a reclamar según sea el caso de que el contribuyente –en este caso, Telecom- haya suscripto –o no- un “convenio de comunicación compartida” con la comuna (v. art. 43 de las ordenanzas tarifarias), no es modo alguno razonable en la medida que, si el servicio que se retribuye es la concreta y efectiva inspección técnica de las estructuras portantes





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 2

de antenas, no se advierte de qué modo la eventual suscripción de un convenio con la autoridad comunal podría alterar el costo del servicio retribuido.

IV.3. Por último, las particularidades y conclusiones probatorias anteriores no han podido conmover –incluso, han ratificado– el entendimiento preliminar exteriorizado por este Tribunal al momento de conceder la medida cautelar en el sentido de que el acto cuestionado (resol. 140/2020) podría afectar también los derechos de los usuarios del servicio que presta la actora (v. fs. 344, cons. V). Ello así, en tanto un elemental análisis de impacto económico conduce a concluir que el operador naturalmente tenderá a trasladar los costos de la prestación de los servicios que provee al precio que paga el usuario. Si tal costo es –fundamentalmente– irrazonable y no se condice con la retribución de servicio comunal alguno, y a su vez es multiplicado por una inmensa variedad de entidades municipales con intervención en un servicio intrínsecamente interjurisdiccional, ello conduciría a una evidente distorsión del mercado de las telecomunicaciones en desmedro de los derechos de los usuarios.

V. Que en tales condiciones, corresponde declarar la improcedencia e inaplicabilidad de la TIAEP con relación a Telecom y por el Período Reclamado (ejercicios fiscales 2018 y 2019), cuyo cobro pretendió la Municipalidad por conducto de la resol. 140/2020; deviniendo innecesario tomar en consideración los demás fundamentos esgrimidos por la accionante.

VI. Que las costas se imponen a los vencidos, en virtud del principio objetivo de la derrota (cfr. art. 68, primera parte, CPCCN).

Por todo ello,

FALLO:

1º) Rechazando la demanda articulada por Telecom Argentina S.A. con relación al ENACOM, con costas;





Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 2

2º) Haciendo lugar en lo sustancial la demanda articulada por Telecom Argentina S.A. contra la Municipalidad de La Matanza, con el alcance indicado en el cons. V, con costas.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

Esteban Carlos FURNARI

Juez Federal



#35304728#453598626#20250429104626357

